

El retorno de Chile a la democracia

Aranda, Sergio

Sergio Aranda: Economista chileno, Sub-Director de lo Oficina de Planificación Nacional en el período 1970-1973.

1. El Carácter de la Crisis

Las fuerzas democráticas chilenas viven una profunda crisis. Su expresión más aguda es la incapacidad para encontrar una respuesta adecuada conducente a derrocar la dictadura fascista entronizada en Chile y a buscar formas de convivencia democrática que permitan avanzar hacia las transformaciones económicas y sociales que la sociedad chilena reclama con urgencia.

Han transcurrido más de tres años desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y aún no existe un proyecto político claro y definido, capaz de aglutinar a las fuerzas democráticas, señalar con precisión objetivos tácticos y estratégicos y conducir al pueblo chileno al retorno de la democracia.

La respuesta tiene que salir, en primer lugar, de una evaluación seria y en profundidad de los cambios acaecidos en el país durante este período. En tanto las diversas fuerzas políticas persistan en extender hacia el futuro los esquemas que rigieron en Chile hasta el golpe militar, no se habrá avanzado un ápice en la búsqueda de una solución realista y factible.

Hay, ahora, una nueva realidad al interior de nuestra patria. La actuación impune de las fuerzas más oscuras y reaccionarias de la sociedad chilena han modificado en profundidad las condiciones que prevalecieron en las últimas décadas.

En el plano político, todos los partidos están prohibidos o en receso. Los dirigentes más conocidos de la izquierda están muertos, presos o en el exilio. Decenas de miles de cuadros dirigentes medios fueron asesinados, están en las cárceles y campos de concentración o han debido marchar al extranjero. Medio millón de chilenos han salido del país, una abrumadora mayoría de los cuales eran y son personas de arraigadas convicciones democráticas.

En el plano sindical, las organizaciones más amplias y representativas de los trabajadores fueron ilegalizadas y destruidas; los dirigentes legítimos de los trabajado-

res fueron y son desconocidos, detenidos, torturados o asesinados; el derecho a toda forma de reivindicación laboral no sólo ha sido prohibido sino que corre el riesgo de ser aplastado brutal y despiadadamente. Los obreros y empleados más combativos fueron despedidos, independientemente de que tuvieran o no filiación política, cualesquiera que fuese.

En lo que respecta a la economía, los obreros, campesinos, empleados, profesionales y sectores empresariales pequeños y medianos han debido sufrir las consecuencias de la contracción de la economía chilena. La cesantía ha llegado a cifras del orden del 20 % de los trabajadores y, si se considera además el subempleo y el llamado Programa de Empleo Mínimo, la desocupación alcanza al 25 % - 30 %. A esto se añade una redistribución regresiva del ingreso de tal magnitud que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional bajó del 67 % como promedio en los últimos 10 años a sólo un 27 % en los años de dictadura.

Desde otro ángulo, ha habido un fuerte proceso de concentración de la propiedad, basado en la ruina de cientos de miles de pequeños y medianos comerciantes, industriales, agricultores, transportistas, etc. y en el traspaso fraudulento de empresas estatales a un grupo de 6 ó 7 clanes financieros. Estos, sobre la base de la represión y de la superexplotación de los trabajadores, del desarrollo de actividades especulativas y de la compra de los activos de la CORFO (Corporación de Fomento) y de empresarios arruinados han levantado gigantescos imperios económicos.

En el aspecto ideológico, la dictadura fascista suprimió todos los medios de comunicación de masas que no le dieron un apoyo irrestricto. Hay, pues, un manejo casi absoluto de la información pública y de la orientación ideológica. Se miente y se engaña en forma sistemática; los hechos se falsean, se deforman o se ocultan. Los regímenes democráticos del que se enorgullecen muchos países, han pasado a ser, en las mentes afiebradas de la dictadura, "baluartes del comunismo internacional". Así suelen calificar a los países socialdemócratas de Europa, a los gobiernos de democracia representativa de América Latina y aún a sectores del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Durante más de tres años el pueblo chileno ha estado sometido a una propaganda deformadora y mentirosa que, aunque los niveles de conciencia política e ideológica de nuestro pueblo han sido históricamente muy altos y por lo tanto puede discernir entre lo verdadero y lo falso, tiene que haber producido efectos entre muchos sectores de la población.

Sólo por excepción un reducido número de medios informativos, vinculados a la Iglesia y a sectores cristianos han podido conservar alguna independencia.

Finalmente, la crueldad de la represión atemoriza e inhibe de una participación política efectiva a amplios grupos de personas y ha obligado a un trabajo político clandestino con muchas limitaciones.

El efecto de todos esos aspectos ha incidido en la estructura misma de las clases sociales, en su comportamiento, en la modificación de algunas concepciones políticas, de sus reivindicaciones y de sus aspiraciones. Estos cambios de la realidad no pueden ser ignorados y tienen, por el contrario, una gran importancia y significación.

¿Puede acaso sostenerse que estos hechos son superficiales y que no modifican las condiciones políticas, económicas y sociales existentes en Chile antes del golpe militar?

¿Puede, tal vez, sostenerse que la capacidad de organización, de influencia y de conducción de masas que tenían las fuerzas políticas existentes en Chile antes del golpe militar son de la misma naturaleza que la que tienen ahora?

¿Es posible proyectar hacia el futuro la disputa por el liderazgo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana como únicas alternativas de poder?

La respuesta a esas tres interrogantes es una rotunda negativa.

Si hay un rasgo que caracteriza la situación política de hoy es que ninguna de las fuerzas tradicionales puede, en forma legítima, arrogarse la representación mayoritaria del pueblo para tratar de imponer algunos de los modelos políticos que pudieron tener vigencia hasta el 11 de septiembre. El anhelo del pueblo chileno hoy día es deshacerse de la dictadura y retornar a una democracia que recoja los avances conquistados por la historia de Chile y los plasme en formas avanzadas de convivencia social. Hoy más que nunca puede afirmarse que existe en Chile un consenso mayoritario en torno al futuro inmediato de nuestra patria. Este es el reto que debemos recoger. Se trata entonces de construir un nuevo modelo político, que partiendo de una realidad diferente una real y efectivamente a la inmensa mayoría de los chilenos.

¿Cuáles son las consecuencias políticas de este planteamiento?

Primero, que librar la lucha contra la dictadura en forma separada, para tratar de imponer el modelo que cada cual sustenta, sólo logra dispersar las fuerzas y divi-

dir el pensamiento progresista y democrático de Chile. Es una manera, aunque inconsciente, de prolongar la existencia del régimen dictatorial.

En las actuales condiciones no hay ninguna fuerza política que pueda aisladamente, llegar a derribar la dictadura ni es previsible que alguna de las fuerzas políticas existentes antes del golpe se constituya en una fuerza hegemónica lo suficientemente poderosa como para nuclear alrededor de ella al resto de las fuerzas democráticas. Frei lo intentó y fracasó estrepitosamente.

Segundo, que la única vía para derrocar al gobierno militar y a los sectores monopólicos financieros que lo sustentan es crear una amplia alianza de clases sociales que se enfrente a esa tarea y que, posteriormente, convertida en gobierno, se aboque a la democratización de Chile y a la erradicación del fascismo.

Hasta el momento las alternativas a la formación del Frente Democrático han sido un conjunto de acciones aisladas, dispersas, incoherentes, que, por su naturaleza, no han podido golpear a la dictadura con fuerza concentrada. La permanencia de esta conducta política significa prolongar, quién sabe por cuántos años más, el imperio de la brutalidad de la represión, de la superexplotación de los trabajadores. El Frente Democrático antifascista es una exigencia histórica, su constitución podrá demorar un poco más o un poco menos pero deberá formarse necesariamente. A su integración se sumarán partidos, movimientos, grupos y amplios sectores independientes de la población hasta llegar a conformar a la inmensa mayoría de la población chilena. Es por eso que no puede ser concebido como el patrimonio exclusivo de ninguno de los partidos tradicionales o de grupos minoritarios.

La constitución del Frente Democrático será, por otra parte, el producto del trabajo sistemático, creador y responsable del pueblo chileno, en la lucha concreta contra la política de la dictadura y por su derribamiento. Esta lucha tiene y tendrá múltiples expresiones y se librará en todos los campos posibles, no obstante, lo fundamental será lograr la movilización y la participación en ella de la mayor parte de la población y en particular de los trabajadores.

Los partidos políticos que se opongan al Frente o dificulten su materialización quedarán al margen de las masas y serán aislados. Por supuesto, este es un problema que debe resolverse en el seno de cada organización.

2. El Frente Democrático

La alianza de clases que se postula debe estar constituida por obreros, campesinos, empleados, profesionales e intelectuales y al sector empresarial. De hecho, deben formar parte de esta alianza todos los sectores democráticos y antifascistas.

Los enemigos del pueblo chileno son, por una parte, los fascistas - civiles y militares - que a lo largo de estos tres años se han ensañado con el pueblo o que desde los cargos de más alta responsabilidad han servido de sostén y de apoyo al gobierno dictatorial. Por otro lado, están los clanes empresariales que se han enriquecido a costa del sacrificio y de la superexplotación de los trabajadores.

La alianza que se constituya debe tener un carácter estratégico, es decir, que una vez que derroque a la dictadura deberá asumir las tareas de gobierno y la responsabilidad de construir el nuevo régimen democrático. En esta tarea todos los sectores democráticos deberán tener una representación política adecuada. Para que esta democracia renovada tenga la permanencia y estabilidad que el pueblo chileno requiere debe cumplir un requisito esencial:

Tener la flexibilidad necesaria para ir introduciendo las modificaciones que el desarrollo económico, social y político hagan indispensables. Esto supone asegurar el reconocimiento y la vigencia para las nuevas correlaciones sociales que se vayan produciendo en el país, de manera de asegurar que la voluntad mayoritaria de los chilenos se vaya plasmando en las leyes, en las instituciones y en la orientación general de la conducción política del país.

Esta es la esencia de la democracia que es necesario rescatar para Chile.

Debemos, por lo tanto, elaborar un acuerdo programático que, considerando los intereses reales de los distintos sectores que componen la alianza, sirva de guía fundamental en las acciones futuras.

La elaboración del programa es absolutamente esencial para la formación del Frente Democrático antifascista. Nadie puede esperar que se forme una alianza amplia sin responder previa y correctamente a algunas preguntas cruciales.

¿Qué pasará después de derrocar la dictadura? ¿Quién asumirá el gobierno? ¿Qué se hará desde el gobierno? ¿Qué pasará con los derechos sindicales? ¿Qué alcances

tendrá la reimplantación de la democracia? ¿Qué ocurrirá con la propiedad privada? etc.

La construcción de una alianza semejante no es tarea fácil ni sencilla. Los fascistas - militares y civiles -, los sectores monopolistas-financieros, los ultraderechistas e importantes sectores del imperialismo norteamericano urden toda clase de intrigas en la preparación de eventuales formulas de recambio. No se trata de que, necesariamente, la sustitución de Pinochet esté a la orden del día, sino que quieren fórmulas disponibles por si llega ese momento y evitar cualquier posibilidad de una apertura democrática real.

De otro lado, hay sectores democráticos y antifascistas que se resisten denodadamente a una alianza con las fuerzas populares. Quisieran volver a formas democráticas de convivencia social pero sin entrar a los compromisos que representa una alianza y sobre todo, aspirando al control de un movimiento obrero adocenado, dócil y sin independencia.

Por el lado de la izquierda también hay problemas. Hay sectores importantes que visualizan una alianza amplia - y no todos están de acuerdo - pero sólo con el propósito de derribar la dictadura. Liquidada la dictadura plantean recobrar una completa libertad para cuestionar al nuevo gobierno, redoblar la oposición y reivindicar como tarea inmediata la constitución de un poder popular.

Todas esas concepciones son incompletas, estrechas e irreales. La sociedad chilena requiere cambios con urgencia y no es concebible la existencia de un Estado democrático de cierta permanencia y estabilidad sin abordar los cambios estructurales esenciales. Cada país siente la necesidad ineludible de acometer las transformaciones que permitan avanzar hacia el progreso económico y social. La justicia, la democracia, el estado de derecho no pueden fundarse sobre la miseria y el hambre. Debemos construir una sociedad diferente, democrática y profundamente participativa que elimine la arbitrariedad, la injusticia, la ignorancia. Una sociedad en que los hombres vivan en libertad, con dignidad, imbuídos de la necesidad del trabajo creador y con un alto sentido de la responsabilidad social. Es preciso abrir nuevos cauces para el desarrollo económico y social de manera que pueda proporcionar a la clase trabajadora un nivel decoroso de bienestar material y de acceso a los servicios esenciales: educación, salud, etc. La nueva democracia que se construya en Chile después de derrocar a la dictadura tiene que ser ampliamente participativa, en la que todos los sectores sociales: obreros, empresarios, campesinos, empleados, profesionales, puedan, efectivamente, tener acceso a las decisiones que incumben

al presente y al futuro de Chile. Todos los sectores deberán tener garantizada la posibilidad de contribuir con sus ideas y proposiciones, expresadas en forma libre e independiente, a las soluciones de carácter nacional que deban asumir las autoridades democráticas.

La necesidad de abrir en Chile un prolongado período de estabilidad política y social obedece a imperativos que no se pueden desconocer. La democratización de Chile y la erradicación del fascismo no es una tarea que se pueda realizar en unas cuantas semanas. El problema es más arduo y muchísimo más complejo. No se trata, de hacer volver a Chile a un mismo punto, idéntico a cualesquiera que pueda haber habido en los 10 ó 15 últimos años. A partir del arrasamiento de las normas jurídicas e institucionales que normaron nuestra vida democrática anterior, hay que volver a construir las, perfeccionadas y no iguales a las que existieron antes.

Además, será necesario reconstruir la economía chilena sobre nuevas bases menos injustas y más democráticas. También ésta es una tarea difícil y compleja y que llevará un período no corto.

La inestabilidad política y social sólo les haría el juego a los sectores ultrareaccionarios, ultraconservadores, que estarán añorando el imperio de la dictadura y de la represión. ¡Hay que cerrar resueltamente el paso a esta posibilidad! La única forma de lograr la estabilidad que el pueblo chileno requiere es un compromiso entre las diferentes fuerzas sociales, basado en renunciar a parte de sus aspiraciones, por muy legítimas que se consideren, en aras del retorno a la democracia y a una convivencia creadora.

La constitución de la alianza política, aunque es un requisito indispensable, no es suficiente para derrocar la dictadura. Para hacerlo, habrá que poner en tensión todas las fuerzas, organizar y movilizar al máximo a todos los sectores sociales en todas las formas de lucha: huelgas, paros, resistencias pasivas, insurgencia armada, aislamiento internacional, etc. Esto no puede ser fruto de la improvisación. Los riesgos y peligros son demasiado grandes como para tomarlos con liviandad o irresponsabilidad. Pero no cabe ninguna duda de que una alianza social amplia y poderosa puede derribar la dictadura. Puede demorar uno, dos o más años. El tiempo indispensable para reorganizar las fuerzas y preparar la lucha contra la tiranía. Serán inevitables algunos sacrificios. Pero el pueblo chileno tiene inagotables reservas de energía, de coraje, de decisión y de entusiasmo. ¡El pueblo de Chile no acepta vivir de rodillas!

En las luchas por la independencia los patriotas chilenos no fueron remisos en derramar su sangre por conquistar la libertad. No tendría ahora menos heroísmo que antes. Al contrario, ahora es un pueblo más consciente más homogéneo, más templado. La lucha por la libertad ha producido siempre los más altos ejemplos de heroísmo, de abnegación y de sacrificio. ¡Luchamos ahora por nuestra libertad, por nuestra dignidad de chilenos!

No deseamos la violencia. Al contrario, los máximos esfuerzos deben orientarse a buscar una salida pacífica, que no signifique renovar el dolor y el sacrificio para nuestro pueblo. ¡ Demasiados muertos ha habido en estos tres años! Sin embargo, si el precio que hay que pagar por la libertad y por la dignidad humana es alto, los fascistas deben saber que no hay ningún precio, por alto que sea, que no estemos dispuestos a pagar con alegría.

No es posible plantear un proyecto político para recuperar la democracia chilena sin referirse a las fuerzas armadas.

Es necesario, sin embargo, precisar previamente algunos conceptos.

Con propósitos aviesos los fascistas han querido hacer creer que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas. Eso es falso. La seguridad nacional y la soberanía de Chile son cuestiones que atañen e interesan a todos los chilenos, al gobierno, a los partidos políticos y a toda la sociedad. Chile es nuestra Patria, la de todos los chilenos y nos sentimos orgullosos de serlo y comprometidos por ello. Las Fuerzas Armadas son, en lo fundamental, el aparato técnico con que cuentan los países para garantizar la soberanía y la seguridad nacional y, en estos términos, subordinados y obedientes a las autoridades civiles constitucionalmente elegidas.

Aspiramos de una democracia renovada en que las Fuerzas Armadas sean una garantía de la soberanía nacional, obedientes a las autoridades legítimas, participantes de las grandes tareas nacionales.

Para cumplir con esa aspiración, para que las Fuerzas Armadas vuelvan a contar con la confianza, con el respeto y con el amor de nuestro pueblo, es indispensable tomar medidas para que jamás puedan volver a ser utilizados contra el pueblo. Entre otros aspectos habrá que imponer un severo castigo a los principales responsables de los crímenes cometidos, alejar de los mandos a todos los militares fascistas,

disolver los aparatos represivos, principalmente la DINA y buscar mecanismos efectivos para la democratización real de las Fuerzas Armadas.

Sabemos que una parte importante de los oficiales, suboficiales y soldados discrepan de la política de la dictadura y no comparten responsabilidad por ella. En su momento, esos oficiales, suboficiales y soldados estarán junto al pueblo chileno para derribar la dictadura e implantar una democracia nueva, rejuvenecida, sólida y vigorosa.

El contexto internacional es ampliamente favorable a una solución democrática en Chile. El universal repudio que han encontrado los crímenes y la violación sistemática de los derechos humanos perpetrados por la Junta Militar, en los pueblos y gobiernos de prácticamente todos los países del mundo, asegura un amplio respaldo al gobierno democrático que suceda a la dictadura. Sin duda alguna que la mayoría de los gobiernos de los países subdesarrollados, de los gobiernos de los países socialdemócratas europeos, los gobiernos de los países socialistas y amplios sectores del propio pueblo y gobierno norteamericano verían con simpatía el término de la dictadura chilena y su reemplazo por un gobierno de amplio apoyo social.

La lucha actual del pueblo chileno está inscrita en la batalla que libran los demás pueblos, a escala de todo el mundo, por la democracia y contra el fascismo. En esta hora, cuando la ofensiva del fascismo comienza a arreciar en muchos países, los chilenos estamos unidos a las fuerzas más progresistas y libertarias del universo.

Este hecho reviste singular importancia porque el gobierno democrático que forme la alianza después de derrocar la dictadura podrá contar no sólo con un respaldo político internacional indispensable sino, además, con la colaboración y cooperación financiera y económica que ayuden a la reconstrucción del país.

Chile deberá retomar con honor y dignidad el puesto que le corresponde dentro del concierto mundial y colocarse en forma resuelta junto a los países tercermundistas, no alineados, y en especial, junto a los demás países de América Latina. La vocación de integración de Chile en la América Latina para emprender junto a otros países un proceso de desarrollo económico más integrado, más independiente y enfocado a elevar substantivamente el nivel de vida de nuestros pueblos, deberá volver a tener una alta prioridad. La torpe y antinacional política que ha seguido el gobierno militar que culminó con la salida de Chile del Pacto Andino deberá ser modificada de raíz.

3. Lineamientos Programáticos

Es prematuro tratar de formular ahora, en términos precisos, un programa democrático de gobierno. Por la naturaleza misma de la alianza política que se propone, la elaboración de un programa definitivo tendrá que recoger, considerar y armonizar las proposiciones que hagan los representantes legítimos de todas las clases y fuerzas sociales constitutivas de esa alianza. Creemos, sin embargo, que existen algunos principios básicos que cualquier programa deberá establecer. En nuestro concepto hay algunas ideas centrales que deben ir perfilando los aspectos esenciales del Programa Democrático de Gobierno.

El retorno de la democracia significa, en lo fundamental, el respeto a los derechos humanos, la constitución de un Estado de derecho, la libertad, la coexistencia ideológica y el pluripartidismo, el derecho del pueblo de elegir a sus representantes legítimos a través del sufragio universal y secreto. Esto es válido no sólo para la elección de sus representantes políticos sino que en todos los demás ámbitos de la vida social. Significa, además, la libertad de organizarse y de pertenecer a aquellas agrupaciones que cada hombre o mujer desee, dentro de los límites que señala la ley.

Significa la plena vigencia de los partidos políticos, sin otra exclusión que la de aquellas organizaciones fascistas que han sostenido durante todos estos años a la dictadura, atentando permanentemente contra la democracia.

Habrà que asegurar la separación e independencia de los tres poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Ella constituirá una garantía de pluralismo ideológico y político.

Debemos volver a un régimen democrático, con autoridad, respetuoso de las leyes y de los derechos constitucionales.

Hay muchos aspectos importantes que precisar, entre los cuales están la nueva organización política-administrativa del país, la organización institucional, etc. Todo esto deberá ser amplia y exhaustivamente discutido por el pueblo chileno para adoptar las mejores soluciones. El mecanismo adecuado podrá ser una Asamblea Constitucional que, entre otras tareas, apruebe una Nueva Constitución Política para Chile.

Es, tal vez, en los aspectos económicos donde haya que entrar a las definiciones más claras y precisas; ya que es en este plano donde las clases que deben formar

esa alianza encontrarán las mayores diferencias y contradicciones. No obstante, es perfectamente posible encontrar fórmulas que signifiquen ventajas concretas y satisfactorias para todas las partes. La única premisa que hay que tener en cuenta es que si no hay la disposición y la comprensión necesaria para renunciar a algunas de las reivindicaciones que se estiman justas no habrá posibilidad de acuerdo y la dictadura podrá seguir oprimiendo al pueblo durante muchos años más.

El programa económico tiene que reconocer los intereses objetivos de las clases sociales que integran la alianza y considerarlos en las medidas concretas que se postulen. Simultáneamente, debe reconocer que esos intereses objetivos son contradictorios y, a veces, antagónicos y deben buscarse los mecanismos susceptibles de armonizarlos no sólo en esta etapa sino para una etapa muy prolongada en la vida de Chile. Todo esto parece complejo y lo es en la realidad, pero no tiene sentido esquivar esa complejidad con fórmulas simples pero irreales y sin viabilidad.

¿Es posible llegar a una plataforma económica que sea mutuamente beneficiosa? Sí. Hay que tener presente que la economía chilena se ha reducido en un año 15 por ciento y que esta caída casi increíble del Producto Nacional ha castigado severamente a los empresarios medianos y pequeños y aún a los grandes empresarios no monopólicos. Los trabajadores, por otro lado, es decir los obreros, campesinos, empleados, profesionales y técnicos no sólo han sido afectados por la caída del producto sino, en lo esencial, por el proceso de redistribución regresiva del ingreso que descargaron la dictadura y los sectores monopólicos. La participación de los que ganan una remuneración bajó del 62 por ciento del Producto Nacional a 27 por ciento. También los sectores empresariales han sido afectados, aunque en mucha menor medida, por la regresión en la distribución de ingresos. Un puñado de clases financieras se han apropiado de la parte del ingreso que se ha quitado a los trabajadores y a la mayoría de los empresarios. La reducción de los ingresos de la mayoría de la población ha significado la retracción de la producción y de las ventas.

Como primer objetivo, se trata entonces, de lograr la recuperación de los niveles tradicionales de actividad económica. Para ello hay que aumentar de inmediato, en forma progresiva, los niveles de empleo y proceder a un reajuste de sueldos y salarios. El nivel de actividad ha caído en forma tan dramática que existe un margen para reactivar sin producir mayores problemas. Por otro lado, el Estado dispone de los instrumentos necesarios para hacerlo sin que implique atizar fuego a la inflación y sin provocar nuevos desajustes.

Por una parte, existen capacidades instaladas ociosas y no utilizadas en prácticamente todos los renglones del consumo popular. Por otra, hay un derroche escandaloso de las divisas que tiene el país y que, debidamente reorientadas, permitirán adquirir las materias primas y productos intermedios para una producción ampliada. Es decir, existen los requisitos esenciales para que la expansión gradual de la demanda no provoque desajustes en el comercio exterior ni en la economía interna.

Junto a las disponibilidades físicas de los bienes de capital y de los recursos externos, está el problema de no provocar trastornos financieros, principalmente en el presupuesto de la nación. También en esta esfera, el Estado dispone de los mecanismos indispensables para mantener los equilibrios fundamentales. Una primera medida es la de gravar con altísimos impuestos todas las actividades de tipo puramente especulativo. Esto, junto con allegar recursos al Estado, permitirá ir reorientando el capital hacia la actividad productiva. Una segunda es gravar con altos aranceles la importación de todo tipo de mercancías que se produzcan en el país la que, junto con evitar una competencia ruinosa a las actividades de producción nacional, producirán también ingresos adicionales al Estado.

De otra parte, no tenemos ningún reparo en señalar que gobierno democrático recurrirá al crédito interno y al crédito externo; tanto al que proporcionan las organizaciones financieras internacionales como a créditos extranjeros estatales o del sector privado. El problema no reside en acudir al crédito externo sino en velar porque se realice en condiciones favorables para el país y no comprometa su dignidad o su soberanía.

De otro lado, entendemos que el capital extranjero puede y debe encontrar en Chile posibilidades de hacer negocios favorables con un margen legítimo de utilidades como son las que se establecen en el Pacto Andino. Una cosa diferente son las transferencias ilegítimas, contrarias al interés nacional, que ha hecho la dictadura a algunas transnacionales extranjeras. Del mismo modo han sido ilegítimas e ilegales las indemnizaciones concedidas a las empresas del cobre y a la American Telegraph and Telephone. Reivindicar en estos casos específicos los derechos de Chile no conforma una política de rechazo al capital extranjero sino que tienden a establecer un marco claro y definido de relaciones con el capital extranjero.

Una alianza de clases permanente que incluye tanto a los sectores de la burguesía como a los obreros y campesinos, y que señala un amplio ámbito de acción a la empresa privada requiere definir en forma meridiana las relaciones en torno a algunas cuestiones claves como las que dicen relación a la elevación del nivel de vida de las

masas populares, a la propiedad, a las utilidades y a la participación de los trabajadores.

La primera cuestión es que la reactivación de la economía está vinculada intrínsecamente con el aumento del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Esta elevación no puede concebirse sólo como resultado de la acción del Estado sino sobre todo como el resultado de que los trabajadores recobren el poder de organización, el derecho de petición y el derecho de huelga.

Será preciso definir, no obstante, el ámbito de las empresas del Estado. En el pasado hubo la necesidad objetiva de que el Estado asumiera directamente la responsabilidad en el desarrollo de algunas producciones y ramas estratégicas en el desenvolvimiento económico del país. Sólo la pasión política podría cuestionar los extraordinarios éxitos logrados por la gestión estatal en sectores de actividad como el petróleo, energía eléctrica, Huachipato y otros. Asegurar el crecimiento sostenido de la economía chilena, significa atribuir al Estado la promoción y gestión de algunas actividades económicas de carácter estratégico, altamente selectivas, que garanticen el ritmo y la dirección principal del proceso de desarrollo económico.

Está vinculada, al mismo tiempo, con la eliminación, lo más rápido posible, de la cesantía y de la sub-ocupación. Entre otras cosas esto implica la necesidad de dar un vuelco a la actual política de gasto fiscal y reorientar la estructura del gasto público.

La nueva democracia que se implante en Chile debe ser esencialmente participativa, esto es, que toda la población y en especial los trabajadores tengan acceso a los mecanismos de decisión en sus más diversos niveles. Desde luego que se trata de rescatar las tradiciones profundas de la democracia chilena con respecto a la elección de las más altas autoridades políticas-nacionales y locales. Junto con ello habrá que precisar otros múltiples aspectos en que esa participación debe ejercitarse de manera de perfeccionar mucho más la democracia tradicional.

Dentro de este espíritu hay que reconocer, sin embargo, que ciertas formas de participación son incompatibles con la naturaleza de la alianza de clases propuesta. El aporte necesario de la empresa privada al proceso económico debe hacerse sobre la base de que la gestión de la empresa es responsabilidad exclusiva de sus propietarios, dentro de los marcos normales que fijan las leyes y las regulaciones del gobierno.

Pensamos que las bases de la alianza deben ser perfectamente claras y no dejar margen a confusiones o a equívocos en asuntos de tanta trascendencia.

4. Hacia Adelante

Para desarrollar la lucha contra la dictadura el pueblo no ha esperado la estructuración del Frente Democrático y antifascista. En las condiciones más duras y más difíciles, dando pruebas incontables de coraje, de tenacidad y de sacrificio, los chilenos han ido enfrentando, en la mejor forma posible, las diversas políticas que han impuesto los fascistas.

En el interior del país están forjando en la práctica, en los hechos, con el trabajo de todos los días, el frente democrático antifascista. Es ampliamente conocido el trabajo político unitario que realizan a diario los militantes de la lucha antidictatorial, haciendo abstracción de las diferencias que pudieron haberles separado hace tres años atrás. Se trata de una cuestión de supervivencia y de hacer más efectivos los esfuerzos contra la dictadura.

Sin embargo, por muy importante que sea el trabajo unitario de la base la carencia de dirección política en el sentido de la no precisión de objetivos tácticos y estratégicos, del sistema de alianzas, etc., le resta fuerza. La inexistencia de un frente estructurado y orgánico ha retardado y ha obstaculizado un trabajo más amplio y de mayor envergadura.

Esa ha sido la experiencia reciente. Sin embargo, debe estar claro que el frente democrático antifascista está naciendo. Al interior de Chile y en el exilio, más y más fuerzas están confluyendo hacia su formación. Es cierto que esas fuerzas se abren paso con dificultad. Hay aún demasiada estrechez, demasiado sectarismo, demasiado personalismo que todavía actúan como freno. Junto a estos factores negativos, sin embargo, hay una creciente claridad, conciencia y resolución para superar todo lo que se oponga a esta tarea esencial. Habrá que recorrer todavía un camino difícil, preñado de problemas y de dificultades, pero el pueblo de Chile tiene fuerzas más que suficientes para avanzar con firmeza hacia la construcción de un futuro luminoso para nuestra patria.